

Argentina: ni democracia estable ni régimen militar sólido *

Liliana de Riz

Cualquier intento de interpretación de la coyuntura por la que hoy atraviesa la sociedad argentina obliga a hacerse algunas preguntas previas para situar la reflexión. Esas cuestiones pueden resumirse, a mi juicio, así: Cuáles fueron los desafíos a los que los militares pretendieron hacer frente en 1976; cuál fue el alcance de las medidas con que pretendieron conjurarlos durante cinco años de gestión presididos por el general Videla (marzo de 1976-marzo de 1981) y, finalmente, qué nuevos elementos es preciso tener en cuenta para interpretar el presente —de Viola a Galtieri— y los caminos hacia el futuro de la sociedad argentina.

La mayoría de los análisis y las críticas al régimen militar argentino que derrocó al tercer gobierno peronista han concentrado sus baterías en el estudio de la política económica. Estas reflexiones, que intentan combinar una doble perspectiva, la del estudio histórico y la del análisis de la realidad contemporánea, se proponen privilegiar la investigación de los factores de naturaleza específicamente política. Esta opción no implica negar la importancia del estudio de los factores estructurales, sino concentrarse en aquellos más propiamente políticos que han sido más descuidados, cuando no ignorados por una visión reduccionista simple del problema, teóricamente inadecuada y políticamente estéril.

Así definido el enfoque de análisis, el punto de partida para abordarlo remite a una constatación histórica: la historia argentina conoció diversos intentos frustrados de “refundación”. Los desenlaces de esos experimentos “fundacionales” distaron mucho de aproximarse a las expectativas de sus inspiradores. Las empresas de reordenación de la sociedad fueron siendo aplastadas por la vigencia de una crisis política que, de manera recurrente, puso fin a los esquemas trabajosamente elaborados por reformadores civiles y militares. La vida política argentina osciló entre los intentos de restauración de un pasado, percibido como mejor que el pre-

* Las ideas de este ensayo formarán parte de un trabajo que habrá de realizarse en colaboración con E. de Ipola y en el que se abordará el estudio del discurso político de la derecha en Argentina (1976-1980).

sente, y los esfuerzos de “revolución” que se fueron quedando a mitad de camino.

Avancemos de entrada nuestra conclusión: el proyecto “fundacional” de los militares en 1976, se diferencia, tanto por sus objetivos políticos como por el alcance de las medidas puestas en práctica, de todos los experimentos militares que le precedieron (1930, 1943, 1955, 1962 y, en particular, 1966). ¿En qué sentido se puede afirmar esta diferencia? Avancemos también el comienzo de la respuesta: en 1976, hay una convergencia fundamental entre la burguesía argentina y los militares acerca del diagnóstico de la crisis como una crisis político-institucional. Hay, además, una convergencia en torno a los objetivos políticos con los que se quiere enfrentar esa crisis (lo que no impide, como trataremos de mostrarlo, la existencia de enfrentamientos a propósito de las políticas del régimen).

El golpe militar de 1976, el más militar de todos los conocidos desde 1930 por la intensidad de la violencia desplegada, se hizo invocando la consigna de “luchar contra la subversión” (fenómeno cuya escala era un dato político nuevo en la sociedad argentina). Su *leit motiv* podría sintetizarse en la expresión “sanear la vida política”. El saneamiento de la economía, caballo de batalla de anteriores intervenciones, pasó a ocupar un segundo plano.

Una vez más, los militares se declaraban los únicos capaces de restablecer el orden social desquiciado y recrear un Estado arrasado por la sociedad. Esta nueva restauración se hizo invocando a la democracia pero en nombre de una democracia diversa de la conocida en el pasado, a la que no dudaron en achacarle el haber sido el origen de la demagogia y el populismo. ¿Cuál democracia? Una que no descansa en cronogramas electorales y ponga límites a la expresión del consenso, señalaron los militares. Un sistema que redefina los mecanismos de hacer política y cree las bases de una legitimidad nueva, conquistada fuera de las urnas.

En 1976, los militares optaron por abandonar el pomposo calificativo de “revolución” para su empresa y prefirieron, con más cautela, el de “proceso de reorganización nacional”. Los reorganizadores de 1976 diferían de sus antecesores en el enfoque de la crisis y habían aprendido en las amargas lecciones del pasado. Reaparecieron menos grandilocuentes en sus expresiones y más drásticos en sus acciones.

Es obvio que la imagen de la situación tal y como la definieron los militares en 1976 no fue independiente de las condiciones imperantes en el período de Isabel Perón (julio de 1974-marzo de 1976). El golpe militar se presentó como la respuesta necesaria para una situación de crisis profunda en que se debatía el gobierno peronista. Como nunca en el pasado, la descomposición del gobierno de Isabel y su total incapacidad para hacer frente a la crisis despejaron el camino por el que los militares transitaron sin encontrar resistencias. Es necesario tener en cuenta que por la desarticulación del régimen peronista el centro de gravedad de las luchas se había desplazado hacia el interior del propio movimiento peronista y que,

lo que estaba en cuestión entonces, era la naturaleza misma del peronismo; un cuestionamiento surgido antes de la muerte del viejo caudillo pero que, ya sin su presencia física, escapaba a todo control — no fue compensada por la resistencia de la sociedad civil. Por el contrario, ésta asistió en medio de la indiferencia o el fatalismo, al desenlace militar con que se pretendía poner fin a la violencia.

Los militares derrotaban, en 1976, a un gobierno que había nacido de su propia derrota política. La intervención militar volvía a desplazar al peronismo del gobierno para cuestionar, en un mismo movimiento, tanto a la experiencia peronista clausurada, como a las instituciones y políticas que la habían hecho posible. Después de casi veinte años de proscripción, el orden político representativo volvía a ser impugnado, pero esta vez, la impugnación abarcaba a la ecuación Estado-sociedad que definían como peligrosa.

En el diagnóstico de los militares, la raíz de los males que por décadas aquejaron a la sociedad argentina residía en el ejercicio del sufragio sin restricciones, la intervención del Estado en la economía, la política de bienestar social (el Estado benefactor), el excesivo poder de los sindicatos (el denominado “contubernio cómplice” entre el Estado y el aparato sindical con que se calificó a una acción sindical cuyo interlocutor privilegiado fue el Estado y no la patronal). Esa peligrosa ecuación Estado-sociedad amenazaba la existencia misma de la Nación y de sus instituciones más caras: la familia, la religión.

Para remediar esos males, nuevamente se militarizaron los aparatos del Estado con el objetivo de “civilizarlos” en el doble sentido de poner fin a mecanismos de funcionamiento institucional “bárbaros” y, por ende, crear las condiciones para una sucesión civil tutelada, en un futuro no precisado en el tiempo (“El gobierno tiene objetivos pero no plazos”). Se trató de suprimir la política, de retrotraer a la sociedad a un estadio pre-político para redefinir las condiciones en que se hace la política; o sea, crear una nueva relación de fuerzas políticas capaz de sostener un sistema restringido de negociación de los conflictos sociales.

Esta vez, como lo muestran los siete años de gestión, los militares estuvieron dispuestos —no sin conflictos internos— a ir más lejos que en el pasado para modificar las condiciones mismas de la crisis político-institucional. Para ello, no dudaron en atacar, de manera más drástica, lo que a sus ojos eran las causas de esa crisis; causas que no pasaban, ni siquiera fundamentalmente, por la liquidación de la guerrilla.

El régimen militar entendió que ése era el único camino para conjurar la importancia decisiva del peronismo en la vida política argentina y que debían transitarlo para hacer entrar al país en una nueva etapa de desarrollo capitalista, adecuado a la coyuntura mundial.

Los objetivos políticos del régimen militar no eran objetivos puramente coyunturales (poner fin a la experiencia peronista inmediata), como tampoco lo habían sido los impulsados en 1966. Sin embargo, lo que diez años más tarde surgía con claridad era la necesidad de modificar el modo de

funcionamiento del sistema político; librarlo de lo que concebían como sus vicios del pasado. En efecto, ya no bastaba con suprimir el parlamento si sobreviviría una suerte de "parlamentarismo negro", a través del cual dejarían sentir su papel desestabilizador las fuerzas políticas proscriptas.

En el régimen surgido en 1976 fue determinante el peso de una agitada historia de inestabilidad política que se remonta al primer derrocamiento del peronismo, en 1955. A partir de entonces, la realidad se había mostrado rebelde a todo intento, civil o militar, de crear un orden político legítimo y estable: un sistema político en el que los enfrentamientos entre las clases pudieran regularse en el seno de las instituciones políticas.

Después de 1955, más allá de los enfrentamientos en torno a los modelos económicos alternativos para el país, el peronismo fue la cuestión clave que sobredeterminó los clivajes y los alineamientos de fuerzas políticas. ¿Por qué? Para responder a esta pregunta es preciso volver la atención a la presencia de dos hechos políticos nuevos que comenzaron a regir la vida política argentina. Por una parte, la continuidad de la identificación política peronista de los sectores populares; una continuidad que se alimentó de la fuerte heteronomía del movimiento obrero organizado y de su dependencia del carisma personal de Perón. Por otra, la influencia y el poder que el propio Perón supo conservar durante los largos años de proscripción y exilio. Así, el líder logró, no sin conflictos con los dirigentes sindicales, impedir la estabilización de toda fórmula política elaborada por sus adversarios, civiles y militares. En los hechos, el peronismo funcionó como el gran partido opositor implícito en el sistema político: él era quien determinaba el triunfo o la derrota de cualquier combinación política que propusiera una salida legal para la crisis de sucesión abierta en 1955.

Los militares adoptaron una actitud de cerrada oposición al peronismo y a su eventual retorno al gobierno. En 1958, Frondizi fue elegido presidente gracias a los votos peronistas (el pacto entre frondizismo y peronismo). El programa "desarrollista" de Arturo Frondizi se proponía modernizar la estructura productiva del país. Esa tentativa de reestructuración del capitalismo argentino se fundaba en la profundización del proceso industrial, la apertura al capital extranjero y la austeridad. En lo fundamental, tenía como antecedente la política económica de los últimos años de gobierno peronista (1952 marca, en efecto, el giro drástico en el programa peronista). Sin embargo, en las nuevas condiciones nacidas del derrocamiento del peronismo, el desarrollismo estaba condenado al fracaso por la debilidad de una alianza política que no tardó en mostrar su naturaleza puramente táctica. Careciendo de una base social de apoyo propia (Frondizi no pudo sostenerse como Eduardo Frei en Chile, quien concentró el apoyo del campesinado) también terminó derrocado por un golpe militar, en 1962.

Las fuerzas armadas, atravesadas por el dilema de cómo comportarse frente al peronismo, dirimieron sus diferencias en el combate entre "azu-

les”, partidarios de la integración del peronismo, y “gorilas”, deseosos de extirpar el fenómeno peronista de la vida política argentina. El gobierno radical de Illia, que coronó el triunfo de los azules, tampoco pudo resolver el dilema. Habiendo accedido al gobierno gracias a la proscripción de los votos peronistas, el Radicalismo del Pueblo fue derrotado por un nuevo golpe militar en 1966. Una vez más, fracasaba la salida legal. A partir de entonces, la sociedad argentina asistió a una crisis política abierta: crisis de la relación entre el Estado y la sociedad, de la que fueron emergiendo nuevas formas de lucha que habrían de desbordar los cauces tradicionales de acción.

En 1966, los militares levantaron un ambicioso proyecto de transformación económica y social de la sociedad argentina, convencidos de la necesidad de imponer una solución autoritaria que postergase el tiempo político y lo subordinara al tiempo económico. Sin embargo, los sueños antipolíticos del general Onganía no tardaron en chocar contra una realidad que terminó haciéndolos trizas. La paradoja de esa suspensión de la política por decreto fue la politización creciente de viejos y nuevos conflictos sociales. Mientras los dirigentes sindicales reforzaban sus tendencias corporativistas, alentadas por el Onganiato, esa estrategia era fuertemente impugnada por las bases obreras. Nuevas formas de lucha, nuevos temas y una modalidad también nueva de hacer política, surgían desde las bases y se enfrentaban con el autoritarismo patronal y el esquema de relaciones entre el capital y el trabajo que había sido diseñado por dirigentes sindicales y militares. El movimiento obrero organizado, que había vivido una época de repliegue durante el período frondizista, volvió a ganar terreno en la escena política con el advenimiento del régimen militar. Las revueltas regionales que siguieron al Cordobazo (1969), pusieron de manifiesto nuevas formas de acción política de las bases obreras y, al mismo tiempo, la emergencia de nuevos actores sociales surgidos de vastos sectores de las clases medias, en particular de las juventudes de estudiantes. Esa ola de movilización hizo temblar el edificio construido por el régimen militar. Al cuestionamiento de los trabajadores en la fábrica se unió la radicalización de sectores de la clase media. Estos sectores entraron en la escena política amenazando radicalizar los contenidos mismos de la ideología peronista —una ideología que, aunque ambigua, se nutría de contenidos participacionistas, distribucionistas, conciliatorios del capital y el trabajo.

El Cordobazo y la sucesión de rebeliones regionales en 1969 y 1970 pusieron fin a las ilusiones militares de consolidar el régimen. La solución del general Lanusse, la búsqueda de un acuerdo con Perón como única alternativa para salir del *impasse* en que se encontraba el régimen, terminó por triunfar en el seno de las fuerzas armadas. Adversario de la talla de Perón, Lanusse tomó en sus manos el manejo de la crisis. Sin embargo, el “Gran acuerdo nacional” que diseñó, fracasó. Los militares se vieron obligados a ir cediendo paulatinamente en sus reclamos hasta dejar el gobierno al peronismo. Derrotados en sus ambiciones, vieron es-

fumarse el espacio en el que esperaban moverse como árbitros y permanecieron a la defensiva.

Espectadores de un gobierno que era el testimonio de su propia derrota política y blanco privilegiado de la guerrilla peronista y no peronista, los militares mantuvieron un aislamiento cauteloso de toda fórmula política compartida con los civiles. La muerte de Perón, en julio de 1974, marcó el punto de no retorno de una crisis cuya intensidad les parecía confirmar las predicciones dominantes en su seno desde 1955: las políticas y las instituciones que abrieron el camino al gobierno peronista por tercera vez eran el obstáculo que impedía el funcionamiento de la democracia, lesionaban la seguridad nacional y comprometían la grandeza del país al distorsionar su estructura productiva. Eran esas instituciones las que impugnaban y a las que la solución autoritaria *tout court* quería transformar.

La muerte de Perón había dejado en la sociedad argentina la incógnita de si el viejo líder hubiera sido capaz de contener la crisis e imponer su "modelo argentino" para ordenar la sociedad y recrear el Estado (habida cuenta de que los recursos políticos con que contaba Perón no eran los mismos que en el pasado). En las condiciones sociales y políticas de la sociedad argentina, su proyecto de capitalismo "sabiamente gobernado" generó tensiones sociales que sólo una "comunidad política organizada" podría contener y darles cauce. Esa comunidad política no llegó a concretarse y, tras su muerte, las luchas dentro y fuera de su movimiento escaparon a todo control.

El diagnóstico que los militares hicieron de la crisis fue más allá de la coyuntura que clausuraban: la crisis era percibida como una crisis política crónica, marcada por la alternancia de gobiernos civiles y gobiernos militares. El corolario de esta interpretación no podía ser otro que el que extrajeron: tampoco un régimen militar que suspende el juego político puede estabilizarse en el país si no modifica las condiciones "perversas" que bloquean todo proyecto de estabilización. Por lo tanto, si en 1976, como lo habían hecho diez años atrás, invocaron la necesidad de realizar transformaciones radicales en la economía y en la sociedad argentina —invocación que siempre encontró eco entre los políticos— la novedad de la situación consistió en que, esta vez, se imponía una solución autoritaria sin desviaciones corporativistas.

Había que tratar de liquidar, de raíz, los factores estructurales (el modo de funcionamiento de la economía) y los factores políticos (la capacidad de veto de las distintas fuerzas sociales). Para ello, tendrían que desmantelarse los viejos moldes institucionales (económicos, políticos, ideológicos) por los que había transitado la sociedad argentina en las últimas décadas y que eran los responsables de la importancia decisiva adquirida por el peronismo. Esa misión fue percibida por el régimen militar como una misión "funcional", a la manera de la llevada a cabo por la generación del 80 en el país.

Una vez más, los militares convergieron en torno a la idea de que la

precondición para transformar el sistema político era la modificación del funcionamiento de la economía.¹ Aceptando el diagnóstico del liberalismo económico, apoyaron su proyecto político en la instauración de una economía libre, destinada a operar un proceso de selección natural en el cual sobrevivirían sólo las empresas más eficientes. Pronto se pudo apreciar que no se asistía a una intervención puramente restauradora, a la puesta en marcha de una política económica orientada exclusivamente a transferir ingresos hacia los sectores privilegiados y, en particular, al sector agrario. No se trataba de un *shock* más en el ciclo económico argentino marcado por el retorno a una política liberal en lo económico y necesariamente represiva en el plano político.

Los cambios de fondo en la economía implicaron la creación de las condiciones de un nuevo modelo de desarrollo capitalista; un modelo que se esperaba pudiera ser capaz de poner fin al carácter "tortuoso" del capitalismo argentino —un capitalismo signado por capitalistas débiles y sindicatos fuertes— y encontrar un lugar seguro en el orden internacional modificado.

Si, en una primera etapa, la burguesía agraria salió beneficiada, pronto vio aparecer sus ventajas como consecuencia de la política monetaria del régimen (sostén de una tasa de devaluación monetaria rezagada con respecto a la tasa de inflación). La reforma financiera, el otro gran pilar de la política económica, desató un intenso proceso especulativo, favorecido por las altas tasas de inflación (en 1980, el índice anual de aumento de los precios al consumidor era de casi 90%). Sin embargo, en las condiciones de estancamiento de la economía, la crisis financiera —las quiebras bancarias durante 1980 y comienzos de 1981— mostró la vulnerabilidad de un sector generosamente beneficiado por el régimen: los grupos financieros locales y asociados al capital extranjero.²

Todos los indicadores muestran que la omnipotencia del poder recayó sobre las distintas fracciones de la burguesía, ninguna de las cuales fue sistemáticamente favorecida. La brutal transferencia de ingresos desde el sector asalariado hacia la burguesía no respondió a una lógica simple (debe tenerse en cuenta que la participación de los asalariados en el producto industrial bruto descendió desde el nivel récord alcanzado en 1974, de 54%, al 47% en 1975, para caer a menos del 30%).³ Las ganancias y la capacidad de acumulación aumentaron —la multiplicación de las

¹ La política económica del actual régimen militar difirió de la aplicada en la etapa 1966-1970. La política del entonces ministro de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, procuró reforzar la inversión y la expansión de la industria a través de cambios en la distribución del ingreso y en los precios relativos, pero sin alterar la esencia del modelo económico que regía hasta entonces. Véase: Adolfo Canitrot: "La disciplina como objetivo de la política económica" (Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino, desde 1976). Estudios CEDES. Buenos Aires, vol. 12, 1979.

² Véase al respecto el artículo de Lucio Geller: "Enfrentamientos financieros en Argentina", en *Le Monde Diplomatique*. Versión en español. Julio de 1980.

³ Véase Aldo Ferrer: "The Argentine Economy: 1976-1979", en *Journal of Inter-American Studies and World Affairs*, mayo de 1980.

quiebras y la crisis financiera lo prueban—, y la gran burguesía fue afectada de manera desigual. De este modo, la política económica del régimen estableció relaciones contradictorias con la burguesía. En los cinco años de gestión del general Videla, una tras otra se fueron levantando las voces de protesta de las clases poseedoras: desde la sociedad rural que representa a la gran burguesía pampeana, hasta la Federación Agraria Argentina (pequeños y medianos propietarios); desde los sectores de la pequeña burguesía industrial, marginal, hasta los sectores de la mediana y gran burguesía industrial.

La burguesía argentina convergió en torno al programa militar de restablecer el orden frente al caos reinante en la etapa final del gobierno peronista, caos en el que había tenido un papel desestabilizador activo). Sin embargo, como bien lo señala Canitrot,⁴ en la medida en que fue dando por descontados sus beneficios, empezó a contabilizar sus costos y la presión por un programa de crecimiento, poco compartible con las premisas del programa conducido por Martínez de Hoz, se hizo cada vez más intensa. El proyecto de la Argentina abierta, pequeña y eficiente, comenzó a hacer aguas, acicateado por presiones estructurales y políticas.

La política económica del régimen situó al gobierno militar en el mismo equívoco en el que se enredaron sus predecesores militares: su opción por una política económica cuyas consecuencias sociales no están dispuestos a pagar, pues no tienen la coherencia y las fuerzas suficientes para enfrentarla. Opción ésta que comparte con la historia de los regímenes civiles algo “perversamente” común y es la percepción de que una política es insatisfactoria, pero irremplazable, porque no se “ve” otra alternativa.

¿Cómo, entonces, hacer frente a los desafíos y a las nuevas formas de oposición creadas por la política del propio régimen?, ¿cómo evitar “la soledad de poder”, peligroso enemigo al que sus armas no saben combatir?

Las difíciles relaciones con la burguesía —los industriales levantando la bandera del crecimiento y pidiendo comprensión ante la ola de bancarrotas que sucedió a la crisis financiera; los agrarios clamando por apoyo y orden; los banqueros buscando recuperar su posición perdida— debilitaron la posibilidad de una alianza sólida entre el régimen y los sectores de poder económico consolidado, a la manera de la lograda por el régimen brasileño a mediados de los sesenta o por el uruguayo y el chileno, más recientemente.

Como observa Canitrot,⁵ “El abandono de la política antiinflacionaria contractiva iniciada en la segunda mitad de 1977, resultó, no de la impo-

⁴ Canitrot, *op. cit.*, p. 34. Para un análisis de la política económica, véase también: Carlos Ábalo: “Cinco años y una nueva etapa”, en *Controversia*. México: año III, núm. 11-12, abril de 1981.

⁵ Las medidas adoptadas son: imposición de una nueva legislación sindical destinada a dismantlar a las organizaciones que en el pasado habían permitido al sindicalismo concentrar poder; disolución de la Confederación General del Trabajo; reducción extrema de los recursos económicos de los sindicatos; cancelación de la actividad político-partidaria; modificación del sistema de sindicato único. Para un análisis del peso

sibilidad de controlar la oferta monetaria en presencia de un mercado de capitales abierto al exterior, sino de la negativa del gobierno a afrontar las consecuencias sociales y estructurales de dicha política. Las fuerzas armadas habían vetado desde un principio, invocando razones de seguridad, toda política económica que significara un alto nivel de desempleo. Más allá de esta invocación circunstancial, la decisión reflejaba la posición tradicional de la corporación militar sobre la cuestión social”.

La cita precedente apunta al centro del dilema del gobierno militar: la cuestión social y el modelo de país que se busca imponer. El objetivo principal del proyecto militar era disciplinar a las fuerzas sociales en pugna. Sin embargo, ello no involucraba ni dismantelar a la industria (sólo desprenderse de los sectores más ineficientes), ni desproteger a la clase obrera, abandonando su suerte a los avatares del mercado. A diferencia del programa del gobierno militar chileno, nadie pensó en la Argentina como un país “chico”.

El carácter contradictorio del régimen, fundado en una política económica poco compatible con la imagen de las condiciones estructurales y sociales deseadas para la sociedad argentina por sus protagonistas militares, terminó por bloquear las decisiones de sus tecnócratas sin que ello se tradujese en la conquista de un soporte social propio. El corolario de la gestión de Videla fue que no se pudo disciplinar a las fuerzas sociales y tampoco se pudo lograr el ansiado crecimiento económico, pese a las transformaciones estructurales emprendidas.

Si bien el régimen puso en marcha una de las tentativas más radicales para recortar el poder sindical, las medidas adoptadas no quebraron totalmente la vigencia de factores estructurales y políticos (un mercado de trabajo equilibrado, una clase obrera madura y con fuerte cohesión política) que continuaron debilitando la capacidad del gobierno militar para hacer frente a las tensiones generadas desde abajo y desde arriba de la pirámide social. Uno de los columnistas de la revista mensual *Carta Política* se quejaba así: “el gobierno militar [...] qué poco ha hecho con las organizaciones políticas y gremiales responsables de cuanto nos ha sucedido” [...] “Nos preocupa sí, ese casi nada contra el mal usado poder político-sindical”.⁶

de factores estructurales y políticos en el poder del sindicalismo argentino, véase Juan Carlos Torre: “La cuestión del poder sindical y el orden político en Argentina”. Mimeo, 1979.

Los efectos de la crisis económica, agudizada durante 1981, sobre el mercado de trabajo industrial (fuerte caída del nivel de ocupación, reducción de la jornada de trabajo), aunados al giro en la política económica de la actual administración del presidente Galtieri, habrían asestado un rudo golpe a la capacidad de presión sindical. Sin embargo, como se mostrará más adelante, el peso político del sindicalismo sigue en pie y cuestiona el orden militar.

⁶ Oscar Magdalena “Llamando a Nuremberg”, en *Carta Política*, núm. 66, mayo de 1979, p. 13. La agresiva queja es anterior a la sanción de la nueva ley sobre el sindicalismo que, no obstante, tampoco conformó a éste y otros editorialistas de la mencionada revista.

En marzo de 1981, el general Viola sucede como presidente de la junta militar al general Videla en medio de un clima de incertidumbre general y ante un gobierno erosionado por sus propios fracasos y la conciencia de su ineficiencia. Viola reiteró que no había sido designado para liquidar el proceso sino para continuarlo; que no buscaba una salida sino una solución; que los cronogramas electorales son apenas formas y no fondo para vivir en un sistema de hombres libres.

Sin embargo, la crisis de credibilidad penetró toda la sociedad argentina e involucró a las instituciones castrenses; ellas mismas reiteraban palabras que sonaron como puro vacío. Mientras el nuevo presidente hacía declaraciones ambiguas y su ministro de economía, Lorenzo Sigaut, el llamado "ministro de las devaluaciones", pedía paciencia a todos los sectores sociales, el comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Galtieri, declaró que: "En los últimos cincuenta años, otros procesos militares enfrentados con el cristianismo, tomaron el camino equivocado y creyeron que las elecciones eran la solución al problema político. La historia de estos fracasos sucesivos, las consecuencias de los que aún sufrimos, nos dejan la dura pero sabia lección de que no debemos cometer el mismo error". Esta advertencia premonitória, hecha por el general Galtieri en el día del ejército, era la respuesta a la situación vigente, marcada por una reactivación política de la sociedad civil.

¿Qué había ocurrido en el campo de la oposición civil? La creación de la Multipartidaria, un frente político que agrupa a cinco partidos en nombre de la reconciliación nacional y de la democracia (el Radicalismo, el Justicialismo, los desarrollistas, los Radicales Intransigentes y los Demócratacristianos), convocada por Ricardo Balbín, presidente del Radicalismo, se presentaba como un primer paso hacia la consolidación de una oposición política capaz de negociar con los militares los límites y los mecanismos de la acción política.

Esta convergencia política, remedo de la vieja Hora del Pueblo, convocada por Perón en 1970, nació en una coyuntura diversa de la de entonces y en la que pesaba un dato político nuevo: la desaparición de líderes que pudieran negociar con la fuerza de su autoridad personal, como lo eran Perón y Balbín —quien fallece poco tiempo después de convocada la Multipartidaria. La muerte de Balbín quitó de la escena al último personaje clave que animó la salida legal en los años sesenta.

Las fuerzas armadas, sin capacidad para instaurar un sistema político no vulnerable por la oposición —el Movimiento de Opinión Nacional (MON) con el que, del mismo modo que en otros fallidos intentos militares, se quiso reestructurar el mapa político argentino, seguía siendo una declaración de propósitos— vieron levantarse el fantasma de otro 1973.

La posición de Galtieri, de recuperar la iniciativa y no abandonarse a una política reactiva y a la defensiva, terminó por imponerse en el seno de la corporación castrense. La destitución del general Viola, obligado a renunciar pretextando razones de salud, puso fin al breve interregno (marzo-diciembre de 1981) de sucesión militar institucionalizada con que se pre-

tendía evitar toda sospecha de fractura interna en torno a los caminos a seguir. El gobierno representativo, anulado de la vida política y trasladado a las fuerzas armadas, también se derrumbaba, derrotado por un golpe dentro del golpe, revelador de la fragilidad de su implantación.

La especificidad política de la sociedad argentina terminó por doblegar las aspiraciones militares, operando una suerte de bloqueo político al gobierno militar. Ninguna clase o fracción estuvo dispuesta a pagar los costos de una política económica y no vaciló en echar mano a los recursos de poder con que contaba. El "dilema de gobierno" se repitió en un contexto social marcado por un sindicalismo que, pese al recorte radical de su poder de negociación e influencia, conservó capacidad para resistir a los esfuerzos "fundacionales".

Sumergida en una profunda crisis económica,⁷ la sociedad argentina volvió a encontrarse con su viejo dilema: no se pudo establecer una democracia estable, pero tampoco un régimen militar sólido.

El nuevo presidente militar, general Galtieri, por primera vez desde 1978 también comandante en jefe de las fuerzas armadas, advirtió en su discurso inaugural que "el tiempo de las palabras y las promesas se ha agotado [...] Este es el tiempo de la acción". Haciéndose eco de la consigna levantada por la Multipartidaria "antes de que sea demasiado tarde", la acción militar sorprendió a una oposición difícil, demasiado dividida como para ofrecer resistencia.

El gobierno optó por retornar a las premisas del neoliberalismo de 1976, argumentando que los fracasos se debían a una aplicación insuficiente de esos principios e instaló un equipo coherente de derecha, con carta blanca para llevar a cabo un programa sin "desviaciones". El liberalismo "integral" del nuevo ministro de economía, Roberto Alemann, se opuso al liberalismo "pragmático", de Martínez de Hoz y de Sigaut, más cauteloso ante las consecuencias sociales. Deflación, austeridad y libre mercado, volvían a levantarse como los grandes objetivos de la política económica. Para ello, debía avanzarse sin limitaciones en el proceso de desestatización y desregularización de la economía, dejando al mercado como eje ordenador de la sociedad.

El general Galtieri buscó imponer un nuevo estilo de gobierno marcado por el personalismo y una imagen de fuerte ejecutividad. El "Galtieri

⁷ La fuga de capitales, la ola de bancarrotas y los pánicos financieros recurrentes compusieron el panorama de la crisis. En los primeros ocho meses de 1981, los quebrantos comerciales ascendieron al equivalente de 1 544 millones de dólares. El déficit presupuestario en el año no fue menos del 6%, la deuda externa alcanzó a 30.000 millones de dólares (tres veces el valor de las exportaciones y equivalente a un tercio del Producto Bruto Interno), el ministro Sigaut admitió que entre octubre de 1980 y abril de 1981, la tasa de desocupación se duplicó. En el último cuarto de 1981, el PBI cayó 11.4% con respecto al mismo período de 1980; el Producto Industrial, 22.9% y los salarios reales, 19.2%. El alza de los precios durante 1981 alcanzó a 131.4%. Para un análisis exhaustivo de los indicadores de la crisis económica pueden consultarse los diarios del periodo y también: *Juicio de residencia a Martínez de Hoz*. Eduardo Varela Cid (comp.), El Cid Editor. Buenos Aires, julio de 1981.

look” como se dio en llamar a su nuevo estilo —remedo paradójico de la figura del general Lanusse— no impidió percibir que, pese a la vocación de instaurar una autoridad firme, se avecinaban meses “socialmente calientes”.⁸

La política nunca desterrada del todo por la violencia y el terror, parecía volver a estar condenada al silencio en la coyuntura abierta en diciembre de 1981. Sin embargo, no fue ni es así hoy.

En el seno mismo de la corporación militar, las medidas programáticas adoptadas, hacen estallar la política por las voces de los miembros de la Junta Militar. El brigadier Lami Dozo, comandante en jefe de la fuerza aérea declaró: “debe llegarse al equilibrio de ‘tanto Estado’ como sea necesario, para ‘tanta sociedad’ como sea posible”.⁹ Los 90 días de Galtieri se cumplieron en un clima de deterioro de su poder y de reactividad de la oposición política y sindical. La Multipartidaria llevó a cabo su primer acto político en el interior del país al que, según cifras oficiales concu- rrieron 5 000 asistentes y en el que el público coreaba: “se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar” y “Balbín, Perón, un solo corazón”.

En un clima de ebullición política, el gobierno continúa manteniendo indefiniciones tácticas, condenando, al parecer, a la improvisación ante una oposición política súbitamente fortalecida y un sindicalismo más agresivo en su decisión de enfrentar al gobierno. Téngase en cuenta, a modo de ejemplo sintomático, que es un juez el que recuerda que existe la veda política a propósito de la solicitud del Partido Nueva República para realizar tareas de afiliación (*Clarín*, 19 de marzo de 1982).

Hoy, el gobierno militar presidido por Galtieri se encuentra en una difícil situación, condenado a buscar en la restauración y en la improvisación, la solución para los males que aquejan el presente de la sociedad argentina. Antes que ser el fruto de un ansiado diseño por encima de la sociedad, resulta ser el efecto de las pugnas presentes en la misma y refractadas en el seno de la corporación militar. Una vez más y pese a las actitudes, los gestos y las medidas adoptadas, es un gobierno precario, contradictorio, que ya no puede apelar al argumento de la liquidación de la guerrilla como sustituto de la toma de decisiones ni a la lucha contra la subversión ideológica, consigna que nunca tuvo eco en una sociedad cuya paradoja es que puede aceptar el disenso ideológico aunque no pueda trasladarlo al campo institucional.

Si buen gobierno se llama seguridad y desarrollo y no principio de representatividad en la vida política o legitimidad de origen, una vez más, el gobierno militar fracasó. El “enemigo interior” ya no puede ser definido en los límites estrechos de la subversión sino que abarca progresivamente a amplios sectores de la sociedad.

El gobierno militar y la oposición civil recogen los mismos desafíos, simétricos y opuestos: ¿cómo evitar un nuevo 1973 con un desenlace simi-

⁸ Véase *La Nación* de enero 8 de 1982.

⁹ *La Razón*, 6 de marzo de 1982.

lar?; ¿cómo impedir que la suerte sea la misma de la del experimento fundacional de 1966 o la de la crisis militar abierta, del período 1962-1963?

Si bien no es la intención de este ensayo predecir el destino inmediato del gobierno militar ya que las posibilidades de transformación dependen de la fuerza con que la sociedad civil y sus expresiones políticas sean capaces de articular una propuesta de poder para esos desafíos, con una perspectiva distinta de la del pasado, parece razonable hipotetizar que algo ha cambiado en la sociedad argentina. La conciencia de que si la historia se repite, "no habrá más historia" comienza a dominar la óptica de los distintos actores políticos. Si la incertidumbre sobre el futuro sigue siendo el sino fatal de esta sociedad, más preocupada por la nostalgia de su pasado, hoy parece comenzar a mirar ese futuro con la oscura conciencia de que algo terminó en 1976, de que se cerró una larga etapa histórica.

Cabe preguntarse si los partidos políticos podrán retomar el curso de la historia y crear una comunidad política sólida como instrumento para salir del *impasse* actual. También, si en esa tarea podrán resolverse las dificultades que plantea un sindicalismo históricamente habituado a definiciones excluyentes en el plano político y poco propenso a mirar con buenos ojos la instauración de reglas democráticas de juego político que no le aseguren la supervivencia de su fuerte capacidad de acción.

La oposición política ha recogido el desafío de la democracia pese a que, en esa empresa, los propios partidos políticos tienen que resolver un dilema: ¿cómo liberarse de los vicios del pasado?; ¿cómo abandonar viejas tradiciones que los situaron más en el papel de grupos de presión, tratando de ejercer influencia sobre algún sector de las fuerzas armadas y aceptando un cierto *modus vivendi* con el régimen militar de turno, que como articuladores de una propuesta capaz de englobar a amplios sectores de la sociedad? Interlocutores "naturales" del gobierno militar que declaran su intención de iniciar una "gradual democratización" de la sociedad argentina, los partidos políticos enfrentan hoy una nueva dinámica que pone en cuestión no sólo la forma, sino también los contenidos de sus prácticas políticas.

La oposición política recuperó la voz en una coyuntura marcada por la paradoja de una política económica que el propio ministro del régimen, Roberto Alemann, calificó de incompatible con la redemocratización política. ¿Cómo conciliar, entonces, una fórmula política capaz de institucionalizar los conflictos emergidos en la compleja dinámica de la sociedad con el trasfondo de una crisis económica para la que no se avizora sino su agravamiento?

La reconstitución de canales institucionales democráticos de negociación y compromiso entre las fuerzas sociales no será el resultado automático de lo que se presenta como el camino hacia una nueva derrota de los militares. El creciente deterioro del poder militar no ha sido compensado por un fortalecimiento equivalente de la oposición. La negociación misma de los mecanismos y sus límites para hacer política queda condicionada por este hecho: los militares no harán más concesiones políticas que las que

la oposición pueda arrancarles. A la vez, el tema de la recomposición política de la sociedad argentina aparece subordinado a las urgencias de hacer frente a una crisis económica como si la clave de los conflictos económicos y de las respuestas a éstos no dependiera de la fórmula política de poder.

En la actual coyuntura, la reconstitución democrática de las relaciones entre Estado y sociedad en Argentina no parece un objetivo a lograr en el corto plazo. Gobernar esa sociedad a través de una fórmula política que garantice la expresión de la heterogeneidad de las demandas conflictuales es la única alternativa para romper la dialéctica perversa que marcó la historia de las últimas décadas. Esa es una tarea por hacer.

Mientras el experimento "fundacional" iniciado en 1976 por los militares hace aguas, una nueva jugada modifica profundamente el panorama político argentino. La ocupación militar de las islas Malvinas en el sur del continente, reclamando la soberanía sobre territorio ocupado por los ingleses, abre una nueva etapa. Ese análisis va más allá de los objetivos con que se armaron estas reflexiones. Proceso en curso, la guerra contra los ingleses, su desenlace aún desconocido y las consecuencias que ésta tenga sobre la sociedad argentina, obligará a tener en cuenta nuevos elementos y su combinación en formas también desconocidas.

Post scriptum

Especulaciones sobre las perspectivas de la democracia

Los procesos de transición política aparecen para muchos como el resultado del feliz encuentro de la necesidad histórica con la habilidad (la *virtù* de Maquiavelo) de una fuerza política para convertir los elementos de crisis del viejo régimen en recursos políticos para la fundación de uno nuevo. La mirada se vuelve hacia los partidos políticos y, cuando en Argentina se hace este ejercicio, la conclusión suele ser desalentadora: lo que resalta es la debilidad del sistema de partidos para fundar un orden democrático estable. ¿Caemos, entonces, en la paradoja de que lo que es necesario para transitar hacia la democracia sólo puede emerger con el funcionamiento de ésta? Sin embargo, la historia no es tan lineal y transparente. Ni siquiera en España puede decirse que la transición exitosa sea la obra exclusiva de la habilidad socialista.

En situaciones como la que atraviesa la Argentina actual, en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, y se producen entonces, toda clase de fenómenos morbosos, una manera de enfocar el problema de la transición a la democracia es centrar la atención en la emergencia de factores nuevos, sociales y políticos, con referencia a un pasado que abarca períodos continuos, y a la vez, perfectamente contrastados, y para salir del cual no basta suprimir las cabezas de un régimen o cambiar de régimen sin cambiar la trama profunda que enlaza sociedad civil y Estado.

Esa trama profunda descansa en tendencias autoritarias y de poca tolerancia para la disidencia, fruto de una larga historia de prácticas anti-democráticas, reforzadas hasta el horror por el autoritarismo militar. Los viejos hábitos autoritarios no se borrarán a golpe de luces; sin embargo, esto no impide pensar en factores que pueden (o podrían) permitir hacer un buen uso o canalización de esos hábitos. Del autoritarismo no se saldrá sino por la conjunción de diversos factores, aun contradictorios, ya que el reto que la transición plantea es el de armar la relación entre lo viejo y lo nuevo.

¿Qué imagen devuelve a la mirada la sociedad argentina de hoy? Para poder responder de manera “impresionística” a esta pregunta evoquemos

la sociedad argentina de finales de la década del sesenta. Si la memoria no se olvida —tentación de muchos en la actualidad, como si no recordar el pasado inmediato a la instauración del golpe militar de 1976 fuera una manera de exorcizar demonios— la sociedad argentina de fines de los años sesenta aparece a nuestros ojos como una sociedad movilizadora, poblada de actores sociales para los que el movimiento peronista tenía un formidable poder de convocatoria. El peronismo de entonces alimentaba en su seno consignas antagónicas: la de la patria peronista y la de la patria socialista; aglutinaba a una izquierda que había decidido renunciar al difícil camino de la soledad política, y a sectores de la derecha que, como en el poema de Cayafis, comenzaron a ver en los “bárbaros”, “a esta gente [que] al fin y al cabo, era una solución”.

El peronismo, en la figura de su jefe, Perón, reaparecía en la sociedad argentina como expresión de la unidad frente a las escisiones que la desgarraban y la activación de la violencia como arma política.

A comienzo de los años setenta, el tema de la democracia tenía poca o nula capacidad de convocatoria. Se hablaba de institucionalizar el país, pero no se debatía acerca de las modalidades organizativas de esa institucionalización, que se descontaba sería democrática, puesto que fue procesada a través de elecciones libres, y también, porque difiere de la experiencia militar. El modelo político de país era una tarea confiada por las mayorías a Perón, el encargado legítimo de conducir a la sociedad hacia otro régimen que la reconciliara con su destino indiscutido de grandeza. El retorno a la democracia en 1973 significó, para muchos, el regreso a la buena tutoría.

Fue el propio Perón, quien al regresar al país utilizó un lenguaje nuevo: el de la “democracia organizada”. En ese discurso los partidos tenían un lugar privilegiado como instrumentos de la reconstitución política cuyo fundamento era el Pacto Social sindical-empresario. Sabemos que su apelación tuvo poco eco y su último discurso público, el 12 de junio de 1974, fue una queja desolada por la indiferencia de la sociedad argentina, menos preocupada por el modelo político que por defenderse en la pugna redistributiva.

Si miramos la Argentina actual, nos encontramos con un paisaje cambiado. Son los militares los que están dirigiendo la transición y la entrega de los poderes; pero no fue una continuada movilización popular la que los obligó a esa lenta y peligrosa claudicación de su fuerza, sino sus propias derrotas en el campo político y en el militar. La transición reaparece no como la consecuencia de un proceso gestado en la sociedad civil y en sus organizaciones políticas, sino como una decisión de los militares que optan por abandonar un poder —que por sus propios errores no pueden conservar— pero se abrogan el derecho de determinar cuándo dejan de mandar, y es el propio comandante en jefe del ejército, el encargado de la organización electoral.

La sociedad argentina hoy, agobiada por la represión y la crisis económica, no es la de hace una década. Sin embargo, la desmovilización que

hoy se observa, si se piensa en la agitación de finales de los años sesenta, o en el desencanto frente al espíritu entusiasta que acompañó otras transiciones, no pueden ser interpretados como un signo de un estado de apatía. Las cifras de afiliación partidaria y el elevado número de votantes en los comicios internos de los partidos desmienten esa hipótesis. No hay estallidos sociales ni manifestaciones de euforia en las calles; pero sí una voluntad de participación en la vida política. La participación política es expresión de instrumentalidad: se participa más porque se piensa que el ejercicio de decidir en asuntos públicos influye sobre la dirección que éstos tomen.

Esta situación permite conjeturar que tal vez esta desmovilización de la sociedad y la súbita relevancia adquirida por la lucha inter e intrapartidaria, sea un indicador de una voluntad de transformar la sociedad y los modos de hacer política. Así, la desmovilización social bien podría ser un síntoma de la intuición acertada de los cambios ocurridos en el lapso de más de diez años que se extiende desde el Cordobazo hasta la actualidad.

Esto no significa afirmar que los conflictos económicos y sociales han desaparecido; pero sí que su modo expresión ha cambiado: los debates ya no se circunscriben a temas económicos; abarcan temas como el divorcio y la patria potestad, el papel de las Fuerzas Armadas en un régimen democrático, el "lugar" de los partidos políticos. La escena pública es diferente de la conocida en el pasado.

Si miramos a los partidos políticos más allá de su larga historia en una tradición de "inversión pretoriana" que analiza Rouquié, ¿qué cambios se empiezan a percibir?

Un primer dato nuevo, que diferencia esta transición de las del pasado, es la desaparición física de los dos líderes de los partidos políticos mayoritarios, Perón y Balbín.

El movimiento peronista no cuenta, desde la muerte de su jefe, con un árbitro único para mediar sus pugnas internas, ni con el político hábil, capaz de transformar los elementos de crisis del presente en recursos políticos para la fundación del orden. Pero hoy, a diferencia de los años setenta, el peronismo no se debate en torno a dos modelos antagónicos de país: no hay vastos sectores peronistas movilizados por la consigna de la patria socialista. El potencial de ruptura que expresó el "peronismo revolucionario" quedó desplazado en nombre de la integración política de las masas trabajadoras a un sistema de justicia social y democracia.

La guerrilla ha sido derrotada y su margen de acción significativamente recortado. La violencia fue desactivada y hoy se reclama por el control de los aparatos represivos estatales y paraestatales en nombre de la ley.

En este proceso de devolución repentina de poderes expropiados por el Estado a la sociedad, la reconquista de la ciudadanía política es una bandera que levantan las distintas clases sociales. Los actuales líderes políticos del peronismo, en competencia por las candidaturas en los comicios internos del partido, recogen el discurso con el que Perón regresó en 1973: insisten en la necesidad de colaboración entre los partidos como pieza clave de la reconstrucción política y, por lo mismo, en la formulación de un pacto

de sociedad; de una fórmula de convivencia entre intereses y opciones antagónicas. A la persistencia de una vocación integrista en el peronismo se agrega el reconocimiento de que la aceptación de la diversidad es el precio a pagar si se quiere lograr la normalidad democrática. La ruptura de la institucionalidad democrática no benefició a los sectores populares sino a la derecha reaccionaria, incapaz de competir en elecciones libres con los dos partidos mayoritarios populares.

Mientras la clase política del peronismo levanta las banderas de la democracia y el pluralismo, como la piedra de toque para ordenar la sociedad argentina y el propio movimiento peronista, y pone en marcha las elecciones en el seno del partido, poco dispuesta a aceptar una orden "desde arriba" (el nombramiento de los candidatos por parte de Isabel Perón), resta conocer cuáles son los significados y el peso de las demandas democráticas en el movimiento obrero organizado. Un tema a explorar es el de esos contenidos, ya que las tendencias antiautoritarias y antiburocráticas en las clases obreras no son un fenómeno nuevo: fueron las cúpulas sindicales las más reticentes a aceptar fórmulas de democracia política que, en principio, constituyeran una amenaza a su propio poder político. Hoy, ese comportamiento defensivo de la dirigencia sindical, alimentado por la situación de inestabilidad política crónica post 1955, podría comenzar a cambiar.

Las transformaciones estructurales (el achicamiento industrial y su secuela de debilitamiento del poder de regateo en el mercado del movimiento obrero organizado y la drástica liquidación de liderazgos llevada a cabo por el gobierno militar) son procesos cuyas consecuencias no han sido sistemáticamente exploradas todavía. Eso hace que sólo podamos movernos en el terreno de las conjeturas y afirmar que si la dirección de esos procesos es la de debilitamiento de la estrategia defensiva del sindicalismo en el movimiento peronista (una pérdida relativa de su autonomía en la elaboración de sus propias políticas) aumentarán las posibilidades que el Partido Justicialista tenga que orientar y culminar la operación de transición hacia la democracia representativa. Hasta ahora, la debilidad del partido para subordinar la lógica corporativa a la lógica política fue uno de los obstáculos que bloqueó la estabilidad del régimen democrático. La experiencia del último gobierno peronista lo puso de manifiesto: muerto Perón, la rama sindical se independizó completamente de la rama política (el partido). El Rodrigazo, en julio de 1975, marcó el claro divorcio entre ambas ya que el Partido Justicialista no pudo mediar los conflictos entre el movimiento obrero y el gobierno de Isabel Perón.

La reciente denuncia del pacto sindical-militar, antes que indicar una convergencia estratégica entre ambas corporaciones —téngase presente que el movimiento obrero fue el blanco privilegiado de la represión militar— muestra una táctica recurrente del sindicalismo peronista, cual es la de negociar a dos puntas, con militares y políticos, su propia independencia como actor político.

El otro partido mayoritario, el radicalismo, emerge en la escena política bajo un nuevo liderazgo, el de Raúl Alfonsín. Un partido cuya raigambre

liberal se remonta a los primeros años de su formación, en el siglo pasado, y cuyo poder de convocatoria se asienta en la reivindicación de los derechos civiles y políticos, hoy se replantea como alternativa popular y democrática frente al Justicialismo, aún en disputa por la definición de sus liderazgos.

La operación de transformación del radicalismo bajo el liderazgo de Alfonsín se asienta en las clases medias y su potencial capacidad integradora en aras de la "moralidad civil". Los radicales reconocen la necesidad de establecer un pacto o acuerdo que autolimite a las fuerzas políticas mayoritarias como condición de la normalización democrática (de una representación pluripartidista efectiva).

La convergencia de peronistas y radicales en torno a la idea de un acuerdo social no se limita hoy a una acción común de soporte de la Constitución, se reconoce como necesaria en los niveles propios de la dirección política del país (el poder legislativo), ya que no se podrá gobernar con una oposición desleal. Esto implica definir en colaboración las bases mínimas en que se asentará la reconstrucción económica y los términos de la necesaria depuración de las fuerzas armadas.

Todavía hoy, ninguna de las dos fuerzas políticas acaba por definir los términos del acuerdo en los puntos claves: sumergidos en los procesos electorales internos, los partidos de la multipartidaria no se ponen de acuerdo sobre el tema económico. En lo que respecta a las fuerzas armadas, los partidos no pueden perdonar pero tampoco han definido cómo se llevará a cabo el pedido de cuentas.

La experiencia enseña que los acuerdos, sin contrapartida institucional, resultan letra muerta. El lugar para poner en marcha esos acuerdos es el Parlamento, como poder legítimo que cuenta con recursos organizacionales, legales y políticos. Ningún Pacto Social entre sindicatos y empresarios será estable —el pasado lo confirma— si no se encuadra en el marco de las instituciones políticas que lo ordenen —los partidos, la legislatura— y definan los límites posibles de la acción de las partes.

Los llamados partidos de centro son un abanico desarticulado de partidos menores (la definición es residual ya que significa ni peronistas, ni radicales, ni izquierda, y es un modo curioso de designar a sectores de la derecha y ultraderecha en Argentina) y siguen sin tener perspectivas electorales de importancia: cuánto de su pobre caudal electoral fluirá hacia el radicalismo es una incógnita cuyo planteo no carece de sentido, ya que una alternativa no peronista podría convocar a sectores deseosos de regular la cuestión sindical en Argentina, si no a su gusto, al menos esperanzados en que el radicalismo le ponga algunos límites.

En ausencia de una izquierda independiente con peso propio, el espectro político converge hacia el peronismo y el radicalismo.

Cuánto de las lecciones del pasado han aprendido los partidos políticos no es una pregunta que pueda ser contestada hoy. Sin embargo, los comicios internos indican que hay voluntad de las clases políticas de encaminarse hacia una gestión más plural que en el pasado, y esa parece ser, a la luz

de la historia política argentina, una precondition para lograr la fuerza política capaz de ordenar la sociedad.

La sociedad argentina tiene ante sí misma un largo camino a recorrer para construirse como sociedad industrial y democrática. ¿Se ha clausurado “la hora de la espada” y ha llegado la hora de la democracia representativa? Al menos puede afirmarse que se camina en esa dirección, visualizada colectivamente como la única alternativa para construir un orden político legítimo y estable, capaz de regular los conflictos y limitar los alcances de una lógica corporativa que penetró el tejido social.

Que la democracia representativa se establezca, más allá de las elecciones libres, y que se consolide como mecanismos de institucionalización de los conflictos sociales, dependerá de la eficacia con que las fuerzas políticas sean capaces de mediar los conflictos presentes en la sociedad civil y lograr que sistema político se emancipe de la distribución de poder de facto en la sociedad. Esto significa decir que se constituya una clase política estatal (no exclusivamente partidaria) en tanto que clase dirigente y tengan expresión movimientos sociales —en particular, me refiero al movimiento obrero y a su reivindicación de los derechos de los asalariados frente a los patrones— que no sean fagocitados por el aparato estatal ni guiados por una lógica puramente defensiva y sectorial.

Para lograr esto es necesario crear las base sociales (redefinir políticamente los clivajes presentes en la sociedad) que constituyen el marco de la operación de transición, y esas bases no se crearán sin quebrar estructuras elitistas y autoritarias de poder.

No basta, pues, que los partidos salgan de la sombra y pasen a la mesa de negociaciones; tampoco que el acuerdo o pacto entre las fuerzas políticas mayoritarias sea sólo expresión de las voluntades de las partes. Una vez en movimiento, el acuerdo quedará en letra muerta. El Parlamento aparece, por primera vez en décadas, como el lugar en el que los partidos políticos puedan soldar pasado y futuro y encontrar los mecanismos institucionales para resolver las crisis sin quebrar el sistema, y producir decisiones allí donde se recurría a la regla autoritaria.

Sin duda, la democracia representativa como régimen político no es neutral; refuerza los privilegios de los ya privilegiados (para usar un lenguaje del *ancien régime*). Sin embargo, es el único régimen que define un espacio contractual en el que, si bien se traslada la desigualdad social a la sociedad política, se definen los mecanismos para una lucha por la igualdad social dentro de la sociedad política. Como se sabe, la democracia representativa fue siempre una conquista de las clases subordinadas y no un regalo de las burguesías. Es también, el único régimen que por definición puede fracasar, producir crisis políticas, y cuyos efectos son inciertos (no necesariamente reflejan una posición de clase). Hasta ahora, la historia argentina es un ejemplo, los regímenes autoritarios instalados por los militares de “un golpe” sólo beneficiaron a los privilegiados, una derecha conspirativa que no pudo competir en elecciones libres con las fuerzas

políticas mayoritarias de la sociedad: el radicalismo primero y el peronismo después.

Es claro que la democracia representativa en una sociedad capitalista no excluye la desigualdad, por el contrario, la presupone. Sin embargo, es también el único instrumento conocido para intervenir políticamente sobre esas desigualdades en sociedades que, como la argentina, están lejos de acercarse al tipo de sociedades en las que triunfó la matriz revolucionaria.

Si la hipótesis de la presencia de factores políticos nuevos en la sociedad argentina tiene la validez de una "verdad conjetural" (al menos, la presencia de una voluntad de transformar los modos de la acción política) puede afirmarse que comienza una nueva época frente a un pasado que abarcó procesos de signos contradictorios: la del tránsito hacia la construcción de un orden político plural y estable. Y esta será otra historia.

Esta historia será la de cómo se responda al reto de armar una nueva relación entre Estado y sociedad: una relación que supone la desprivatización de la política (la reducción del peso político propio de las corporaciones, en particular de la militar) y la desestatización de la política: la devolución del poder expropiado por el Estado a las organizaciones de la sociedad política y de la sociedad civil. Así, un Estado más estatal (porque no puramente basado en la fuerza, ni desgarrado por la interiorización de los conflictos sociales) y una sociedad más socializada (o si se prefiere, menos facciosa) en la que la política no es el resultado exclusivo del peso de los intereses sectoriales o de la pura presión de clase. Finalmente, un sistema político, abierto y flexible, ni deglutido por el Estado ni arrasado por la sociedad.